

Fallido golpe de Estado en España

El tránsito español de la dictadura a la democracia, sin mayores conflictos ni traumas, había sorprendido no sólo a muchos españoles, sino que a la mayor parte del mundo. Hasta el punto de querer proponerlo como un modelo para sociedades que padecían dictaduras militares. Pero las condiciones tanto geopolíticas como de desarrollo económico y social de España pudieran ser irrepetibles en países del Tercer Mundo. Las fuerzas políticas españolas mostraron un nivel de madurez en la construcción de la democracia, que no era de esperarse tan fácilmente. Los dos escollos mayores del proceso, la crisis económica y la violencia en algunas regiones —sobre todo en el país vasco— no se podían atribuir al proceso mismo, pues la crisis económica era un fenómeno generalizado, y la violencia se estaba dando en países de más larga tradición democrática, como Italia, Inglaterra y la misma Alemania o Francia. La conformación y la consolidación de la democracia en España se daba ya como una cosa hecha, y se le consideraba como un fenómeno natural. Por eso, el intento fallido de golpe de Estado, ejecutado por algunos militares el 23 de febrero, sonó como algo inesperado y sobrecogió a la opinión mundial. No vamos a detenernos en describir los detalles del suceso —que por otro lado, han sido suficientemente presentados por los medios de comunicación internacionales y españoles—, sino que intentaremos adentrarnos ligeramente en los antecedentes del mismo, para tratar de descubrir algunas de las causas del levantamiento.

Los acontecimientos del 23-24 de febrero mostraron las principales cabezas visibles del golpe: el coronel Tejero se tomó las cortes, el capitán general Milans del Bosch militarizó Valencia,

y el general Armada, durante muchos años preceptor del rey y jefe importante de su casa militar, actuó de “cerebro” y de negociador entre los alzados y el rey. Sin embargo, las investigaciones posteriores han detectado la amplia red de implicados, tanto entre jefes y oficiales castrenses, como entre civiles de ultraderecha, principalmente afiliados a Fuerza Nueva y al Frente de la Juventud. Como muy bien comentaba un personaje muy allegado a los círculos castrenses, por vínculos de sangre, de amistad y de trabajo, “los militares son iguales en cualquier parte del mundo”. Es decir, los militares obedecen a ciertos patrones de conducta: una ideología concreta, una falta de análisis de las causas que les lleva a querer solucionar los problemas en sus manifestaciones y no en sus raíces, y un ser instrumentalizados por la ultraderecha que trata de embaucarlo con los mitos de patria, nación, justicia y hasta de religión.

Un mes antes de la toma de las cortes, el Presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, sorprendía a la nación y al mundo con su renuncia irrevocable. Entre las muchas explicaciones que se dieron, apenas llegó a ser sugerida la de una presión militar, que fue desmentida por todas las instancias, lo cual pudiera ser indicio de que había tenido su parte en la decisión. Los sucesos de finales de febrero parecen corroborar esa hipótesis. Pero ¿por qué una presión militar que desestabilizara al gobierno, creara un vacío de poder y favoreciera las condiciones para el éxito de un golpe de Estado?

Algunos de los mandos militares habían ganado la guerra civil, otros son hijos o parientes de los que la hicieron, todos han sido formados, han trabajado, y se han constituido en los ele-

mentos operativos de un régimen autárquico, dictatorial, militar, vitalicio, que se vio avocado a la tarea de imponer la unidad de España, lograr la reconstrucción del país, defenderse de la crítica y la oposición internacional que lo aisló por largos años, y acelerar el desarrollo y la prosperidad en una coyuntura favorable de expansión del capitalismo. Todo este proceso va a exigir, por un lado, que se les den ciertos privilegios —económicos, de status y de poder— y, por otro, que se les imbuya de una ideología de patria, unidad nacional, seguridad nacional, anticomunismo, identidad de cuerpo y catolicismo; están para conservar y consolidar el triunfo de la guerra, para servir a la patria, pero a la patria que venció —la otra es antipatria, subversiva, comunista—, es decir, a la clase dominante, que es la que apoyó a Franco y se benefició de su triunfo; están para defender la propiedad privada —el gran capital previo, y el que se ha ido formando gigantescamente en el franquismo—, los valores eternos y cristianos, la civilización occidental, es decir, la oligarquía y el capitalismo más exacerbados; son los garantes de esos “valores” y de la explotación del pueblo, al que si pretende atentar contra el sistema habrá que reprimir por “comunista, antiespañol, subversivo, terrorista y, tal vez, ateo”.

Los cinco años transcurridos entre la muerte de Franco y el intento de golpe han estado preñados de profunda conmoción en los círculos castreños. El haber perdido gran parte del poder y de los privilegios, el ser fiscalizados por los civiles —incluso el Ministro de Defensa era últimamente un civil—, el ver cambiadas las reglas del juego, el verse envueltos por un proceso contrario a su larga historia y a su ideología, era algo para lo que no estaban preparados. Con frecuencia se oían quejas muy graves de parte de los militares y rumores de disconformidad y de querer restaurar el antiguo régimen. En marzo de 1978 se produce la primera gran crisis, cuando es reconocido el partido comunista; el alto mando muestra su desacuerdo, pero se somete por disciplina.

A partir de ese momento se profundiza la división en el ejército y se consolidan las posturas más reaccionarias, que irán dando sucesivos toques de atención al analista político. Se suceden repetidos cambios en los puestos de mando, para controlar los puntos claves por medio de jefes seguros. El rey tiene que dedicar mucho de su tiempo a los militares, para reforzar su liderazgo, apelar al patriotismo, a la unidad, a la constitu-

cionalidad y a la profesionalidad; tal vez lo que más pese en muchos de ellos es el “monarquismo”, que en el fondo no es más que el “franquismo”, pues Juan Carlos fue designado e impuesto por Franco. Pero otras ideologías y otros intereses siguen haciendo mella en muchos militares. Y el número relativamente alto de oficiales y jefes que caen víctimas de la violencia —de tendencia en muchos casos ambigua— va a enardecer a algunos exaltados que quieren dar marcha atrás a la historia.

Un segundo aspecto es la falta de análisis de las causas, y la consiguiente equivocación en la aplicación de los medios. La crisis económica a la que se ve sometida España es interpretada como consecuencia del proceso, y se hace caso, cada vez más, al lema ultraderechista de que “con Franco se vivía mejor”. No se ve —o no se quiere ver— que la crisis obedece al fenómeno de inflación y al de recesión generalizada del capitalismo actual; ni tampoco se toma en cuenta la actitud del gran capital español, beneficiario del franquismo, que presiona desfavorablemente para desestabilizar la economía y propiciar las condiciones para la instauración de un régimen en el que recupere los privilegios perdidos. El proceso de las autonomías es visto por los militares como la ruptura de la unidad de España y la traición a sus principios y funciones, y no como una nueva forma de convivencia, de justicia y de articulación, acorde con las tradiciones forales y la diversidad de naciones y regiones que constituyen el Estado español, a lo largo de la historia. Finalmente, la violencia y el terrorismo son vistos como amenazas a la seguridad nacional y a la vida de civiles y militares; no se analizan las causas del terrorismo, ni se reflexiona que siempre nace en sociedades en las que existe la injusticia y la opresión, y en las que los métodos democráticos de lucha no tienen esperanza de triunfo para las minorías o mayorías oprimidas. Así ocurre en varios países europeos, y en la casi totalidad de los del Tercer Mundo. Una vez montado un aparato militar, cuando se justifica por ser el único medio de defensa de sus derechos, es casi imposible su desarticulación cuando ya no tiene objeto el utilizar esos medios de lucha que han sido relegados por la participación democrática y la satisfacción de los derechos fundamentales.

El tercer aspecto, ya en parte presentado en los anteriores, es la instrumentalización de los militares de parte de la ultraderecha, fenómeno generalizado históricamente no sólo en España

sino en todo el mundo capitalista. El gran capital español crea o profundiza la crisis económica y genera y difunde una opinión de que se debe al proceso de democratización; la solución estaría en un régimen fuerte y estable, dirigido por el capital y los militares, pues “con Franco se vivía mejor”; las sumas de dinero millonarias que se pueden mover para acabar de “convencer” a algunas cabezas castrenses, por supuesto, no se revelan. El proceso de las autonomías podría conducir al desarrollo equilibrado de las regiones más atrasadas, al control del capital, a la fiscalización de la inversión y de las ganancias, al incremento de los impuestos, a las restricciones a la acumulación y a la limitación del mercado; por tanto, disminuir a la concentración del capital, y a poner las utilidades más al servicio del pueblo, equilibrando la hegemonía de aquél. Pero se presenta a los militares como la ruptura de la unidad de la patria y la desintegración de la sociedad. Finalmente, la violencia y el terrorismo son presentados como vicios de la democracia —que tampoco se daban en tiempo de Franco, ¡ignorando la historia!—, intolerables para los custodios de la seguridad nacional, de la unidad de la patria, garantes de la civilización occidental y cristiana; pero se ocultan sus causas y raíces, se incrementa también de parte de la derecha —parece que algunos militares han caído víctimas de atentados ultraderechistas para agudizar el conflicto—, se monta un Escuadrón de la Muerte Nacionalista, nacido en el seno de cuerpos militares y de seguridad, y se arman brigadas paramilitares ultraderechistas que siembran el terror en el país —días antes del golpe son detenidos diversos grupos de jóvenes ultraderechistas con arsenales, curiosamente hijos y familiares de militares, muchos de ellos, y curiosamente también las ciudades principales son Madrid, Valencia y Valladolid, donde el golpe tendría más respaldo— para desestabilizar el régimen y forzar a los militares a que tomen el poder para imponer “el orden y la paz”.

Hay un último aspecto del suceso que no puede ser pasado por alto: la parte que hayan podido tener en todo esto los Estados Unidos. El gobierno español y los medios de comunicación social han tomado una actitud de reproche e indignación por la reacción de aquel país, que es el único aliado militar que tiene España, con estratégicas concesiones en la península. La línea de Reagan Haig-Todman-CIA se mostró cuando menos, no disgustada con el golpe de Estado. Reagan se ha manifestado repetidas veces a favor

de los regímenes duros y de las dictaduras, a las que defiende como baluartes anticomunistas. Haig, que indudablemente se sentirá solidario de los militares, y con los que se ha de entender mejor que con los civiles, declaró que “eso era problema interno de España”. Todman, embajador en Chile cuando el golpe de Pinochet, y retirado de la dirección de la política de derechos humanos por seguir una línea contraria a la pretendida por Carter-Vance, parece que fue reuente a informar a su gobierno adecuada y oportunamente. La CIA sabía con anterioridad lo que se estaba gestando, y dio órdenes de seguridad a las bases americanas y al personal civil en los días precedentes. Las declaraciones posteriores de alabanza, felicitación y apoyo a la democracia no fueron suficientes para diluir los resentimientos y sospechas españoles, y han provocado una lluvia de protestas del gobierno, los medios de comunicación, los partidos y el propio exPresidente Suárez que se negó a entrevistarse con el Departamento de Estado, como estaba programado, en su reciente viaje a los Estados Unidos. Sin duda, un régimen militar estaría más de acuerdo con la política actual norteamericana, y recibiría el apoyo que se está prodigando a El Salvador, a los gobiernos del Cono Sur, y a tanto otros que le hacen el juego a sus intereses.

Unas semanas antes del 23 de febrero el partido que gobierna (UCD) tenía su conflictivo II Congreso, tras la renuncia de Suárez, en los grandes carteles propagandísticos se veía a una multitud unida, bajo el lema “somos muchos luchando por la democracia”. Días después del golpe salían a la calle, hermanados en un sólo objetivo, el de salvar a la democracia puesta en peligro, todos los partidos políticos importantes, las centrales sindicales y el pueblo por millones, como nunca se había visto en el pasado —sólo en Madrid se calcula que se manifestaron millón y medio de personas—. Ya no era sólo la Unión Centro Democrática la que luchaba por la democracia, sino la inmensa mayoría del pueblo español. Como consecuencia del atentado a la libertad y a la democracia los diversos partidos políticos apoyaron al nuevo gobierno, y ofrecieron su esfuerzo por salvar a la Constitución; lo mismo hicieron las centrales sindicales, la jerarquía eclesiástica, y otras muchas instancias. Incluso la ETA político-militar decretó el alto al fuego, para salvar lo básico. Pero no todos los españoles están dispuestos a renunciar a sus intereses particulares. La ultraderecha detonó bom-



El ministro de Defensa, Alberto Oliart, con la Junta de Estado Mayor.

bas contra la manifestación y comenzó a amenazar a los militares leales. ETA militar no aceptó el alto al fuego. Los atentados terroristas se han seguido produciendo. El gran capital está por ver si no seguirá saboteando el proceso. Es posible que no todos los militares complotistas sean descubiertos, y que se vuelvan a articular para un nuevo intento. Al actual gobierno norteamericano

no tal vez le siga interesando más una dictadura militar que una democracia en España. Son muchos, casi todos, los que en España luchan por la democracia, pero quizás los pocos que luchan contra ella, desde ambas metas, guiados por intereses particulares, tengan tanto poder y tantas alianzas que conduzcan nuevamente a España a una guerra civil sin sentido.

S.M.

